



BREVE HISTORIA de la...
**GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA**

Iñigo Bolinaga

La aventura en el Dragon Rapide, el alzamiento en el Marruecos Español, Guernica, la batalla de Madrid, el Ebro... Las causas, los episodios, los personajes y los escenarios clave de la guerra que permitió a Franco dirigir el rumbo de España.

BREVE HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Iñigo Bolinaga



Colección: Breve Historia

www.brevehistoria.com

Título: Breve Historia de la Guerra Civil Española

Autor: © Iñigo Bolinaga

Copyright de la presente edición: © 2009 Ediciones Nowtilus, S.L.

Doña Juana I de Castilla 44, 3º C, 28027 Madrid

www.nowtilus.com

Editor: Santos Rodríguez

Coordinador editorial: José Luis Torres Vitolas

Diseño y realización de cubiertas: Universo Cultura y Ocio

Diseño del interior de la colección: JLTV

Maquetación: Claudia Rueda Ceppi

Mapas: Juan Igancio Cuesta

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

ISBN-13: 978-84-9763-580-6

Libro electrónico: primera edición

A Laura

ÍNDICE

Capítulo 1:

EL BAILE DE LAS BRUJAS

El hombre providencial

Segar el trigo en verde

La conspiración

El vuelo del cuco

Capítulo 2:

GUERRAY REVOLUCIÓN

Las dos Españas

Fuego Mágico

El fin de la república burguesa

Apretar los dientes

Tierra y libertad

La fortaleza

El gran titiritero

Capítulo 3:

LA GUERRA LARGA

El bastión

Ofensiva en el norte

O César o nada

Un estado duradero¹

Los signos de la ruptura

Los hechos de mayo

La ruptura del Cinturón

De Brunete a Santoña

Capítulo 4:

EL ESTADO FUERTE

La obra de Negrín
La república ignorada
El fin del frente norte
Teruel y sus consecuencias
Contra las cuerdas

Capítulo 5:
JAQUE MATE
Ebro: el último cartucho
La conquista de Cataluña
La implantación progresiva
La crisis final

Capítulo 6:
LA PAZ DE FRANCO
La nueva España
El castigo
Los exiliados
La victoria de Prieto
La consolidación de la dictadura

CRONOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA

APÉNDICES

1

El baile de las brujas

EL HOMBRE PROVIDENCIAL

Las elecciones generales celebradas en febrero de 1936 dieron la victoria a una heterogénea agrupación de partidos de izquierda que, apiñada tan solo un mes antes bajo la denominación común de Frente Popular, recogía sensibilidades políticas extremadamente diversas. Desde la reformista Izquierda Republicana de Manuel Azaña hasta agrupaciones políticas extremistas como el Partido Comunista de España o el anarquizante Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, la diversidad del conglomerado electoral de las izquierdas era tan patente como sorprendente su unión. Un encaje de bolillos diseñado para ganar las elecciones sobre un programa forzosamente moderado, centrado en la autonomía regional, la reforma agraria, la laicidad y la concesión de una amplia amnistía a los presos damnificados del bienio gubernamental inmediatamente anterior. Si bien los resultados electorales, contados en número de votos, no supusieron una victoria holgada para la agrupación de izquierdas -4.654.116 votos para el Frente Popular sobre los 4.503.505 obtenidos por los partidos de la derecha-, el sistema electoral republicano preveía la primacía de las mayorías, de manera que

traducido a escaños la izquierda ganó por goleada, con 278 escaños contra solamente 130 de la derecha.



Manuel Azaña Díaz, fundador y presidente de Izquierda Republicana. Desempeñó cargos de primera magnitud en los gobiernos izquierdistas de la república, desde ministro de defensa hasta presidente del gobierno. Durante la guerra desempeñó el cargo de presidente de la república, siendo eclipsado por presidentes de gobierno con personalidades más enérgicas.

El sistema electoral que tantas protestas generó entre los perdedores y que a muchos, Franco entre ellos, les pareció ilegítimo, era perfectamente legal. Dimanaba de un decreto de mayo de 1931 que rigió durante todo el periodo republicano, según el cual el partido o coalición que lograra la mayoría de los votos en cada circunscripción -

siempre que superara un límite mínimo en número de votos emitidos- se llevaba todos los escaños destinados a la mayoría, cerca del 80%, quedando las sobras para el segundo, por muy poca diferencia de votos que tuvieran. Era, pues, un sistema que favorecía la formación de coaliciones de partidos como el Frente Popular o la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que a pesar de su esfuerzo no logró agrupar a todas las sensibilidades de la derecha tan bien como, sorprendentemente, hizo el Frente Popular. Quizá una de las explicaciones a tan inaudita armonía entre las izquierdas provenga del hecho de que fue la propia Internacional la que animó a los partidos comunistas a integrarse en los Frentes Populares, para así hacer frente mejor al avance del fascismo y la derecha radical en Europa. Esto obligó a muchos partidos miembros del Komintern a *taparse la nariz* para hacer causa común con la izquierda moderada. Sea como fuere, España fue el primer país del mundo en el que un Frente Popular se enfrentaba a la tarea de formar gobierno -luego le tocaría a Francia, en mayo de 1936-, lo que a los sectores más reaccionarios no podía sonarles más que a antesala de la revolución. La derecha no perdió el tiempo, y tan temprano como la madrugada del día siguiente a las elecciones, presionó al todavía jefe de gobierno, Manuel Portela Valladares, para que desautorizara el resultado electoral decretando la ley marcial en todo el país en previsión de desórdenes callejeros. Altamente coordinados, el jefe del Estado Mayor del ejército, Francisco Franco, y el líder de la CEDA, José María Gil Robles, saltaron como tiburones contra su pieza; el militar tocando teclas en el ejército y la Guardia Civil para convencerles de la necesidad de proclamar el estado de guerra, tal y como ocurrió en 1934 en Asturias; el político presionando a las autoridades civiles, principalmente a Portela Valladares, a quien obligó a levantarse de la cama a las tres de la mañana para

convencerle de que se estaba gestando el Apocalipsis. Para aquella derecha histórica un gobierno de izquierdas era el caos, la desorganización, la antiespaña. Tenían una visión ciertamente miope de la heterogeneidad de grupos que componían el Frente Popular: para ellos todos era “rojos”, sin distinción. Todos actuaban bajo el dictado de los bolcheviques de Moscú. Una perspectiva ramplona que sin embargo fue plenamente compartida por muchos miembros de una izquierda en gran medida radicalizada, que veía fascistas en todo lo que olier a derecha, lo fueran realmente o no.

Los denodados esfuerzos del binomio Franco-Gil Robles no parecían dar sus frutos. Portela se resistía a firmar un decreto de estado de guerra ya preparado y el director general de la Guardia Civil, Sebastián Pozas, se negó rotundamente a acceder a la solicitud de Franco para que sacara a sus hombres a la calle. Posteriores intentos tampoco lograron el efecto deseado, de manera que finalmente el propio Franco acudió a la presencia de Portela Valladares. El presidente del gobierno acusaba ya la terrible presión que Gil Robles y los suyos habían ejercido en él las últimas horas y recibió a Franco aturdido y asustado. La situación le superaba y desde su inicial negativa a las exigencias del líder de la CEDA, había derivado en pocas horas a aceptar una reunión del pleno del gobierno en la que se decidió decretar el estado de alarma, el inmediatamente anterior al de guerra. Pero eso no era suficiente para Franco. Había que cortar la revolución de raíz, desde sus inicios, que no ocurriera como en Asturias. Había que presionar más y más sobre el jefe de gobierno, hasta que el ejército tuviera plenos poderes en las calles. Ante tal insistencia, Portela terminó por hundirse y presentó la dimisión al presidente Niceto Alcalá-Zamora de una forma más bien apresurada. Ni siquiera esperó a la constitución del nuevo parlamento. Las apariencias parecen apuntar con el dedo acusador a Portela de

abandonar el barco justo cuando más necesitaba de un capitán, y si bien es cierto que debió de mantenerse interinamente en el cargo hasta la formación de nuevas cortes, también lo es que buscó a Manuel Azaña, la gran figura política del Frente Popular, solicitándole que accediera a ocupar ese poder interino en su lugar. Azaña, enormemente sorprendido por lo extraño y repentino de la solicitud, se sintió remiso a aceptar el cargo, pero finalmente su capacidad de hombre de estado se impuso. “Una vez más, dijo compungido, hay que segar el trigo en verde”. Portela huyó despavorido, pero tuvo el valor y la honradez de enfrentarse a las presiones de la derecha cediendo el puesto a una persona de izquierdas, a quien legítimamente correspondía el poder según el resultado de las elecciones. De esta manera, la derecha ya no podía aprovecharse de la debilidad de un Portela que, si hubiera mantenido unos días más el poder, quizá habría terminado accediendo a las presiones de Franco y Gil Robles.



Como líder de la CEDA, José María Gil Robles intentó influir en el presidente del gobierno, Manuel Portela Valladares, para que diera una orden de estado de guerra.

Azaña no era un recién llegado a las lides de la política nacional. Después de una vida dedicada al estudio y la actividad política, con la proclamación de la república, en abril de 1931 asume el cargo de ministro de la guerra y luego presidente de gobierno, llevando a la práctica un gran paquete de medidas destinadas a modernizar el país y eliminar las endémicas desigualdades sociales, lo que le llevará a un enfrentamiento abierto con la iglesia y el ejército, más buscado por los dos primeros que por el propio Azaña. Las medidas a favor de la reforma agraria, la

legalización del divorcio, la secularización de la enseñanza, el decidido recorte militar en cuadros y alteración del sistema de ascensos, y la clara apuesta por la autonomía catalana, inauguraron la terrible lista de agravios que la iglesia, el ejército y en general todos los sectores conservadores echarían en cara a la república pocos años más tarde, siempre muy reacios a cualquier cambio, detrás del cual, veían la revolución. Pero los agravios no brotaron solamente por la derecha. La izquierda veía en las reformas del gabinete Azaña casi un paso atrás, una forma de complacencia con la derecha, en vez de derrocar a los señoritos y hacer de una vez por todas la revolución. La brutal actuación policial en el poblado gaditano de Casas Viejas, en el que se había proclamado la comuna anarquista, y otros casos similares como el de Arnedo¹ dieron alas a la izquierda para reforzar sus tesis contra Azaña. En un país en el que se generalizó peligrosamente en grandes capas de la población la idea de que los de izquierdas eran todos bolcheviques y los de derechas fascistas, Azaña era una especie de bicho raro que a nadie satisfacía. Y por supuesto, desde muchos sectores de la derecha, no era más que un rojo bolchevique, así como un sucio reaccionario burgués para las izquierdas.

Sin embargo, Manuel Azaña no se arredró y continuó trabajando en la línea que se había marcado. Culto, inteligente, dotado de sobrado talento para el gobierno... sí, pero quizá le faltó eso que llamamos *mano izquierda* a la hora de proceder a las tan necesarias reformas, algo fundamental habida cuenta de la hipersensibilidad política de los españoles de la época. Azaña diagnosticó con brillantez los males que atenazaban al país y no dudó en arremangarse y ponerse manos a la obra para sacarlo del fango. Allí donde la derecha veía una España bucólica y tradicional amenazada por el bolchevismo, se alzaba la horrible realidad de un país subdesarrollado que no podía

progresar más que con fuertes dosis de realismo y ganas, algo muy alejado de los ideales medievales de gran parte de la derecha española. En este sentido se puede decir que Manuel Azaña fue lo más cercano que tuvo España de aquel “Cirujano de Hierro” que tan urgentemente solicitaron Joaquín Costa y los regeneracionistas de principios de siglo para hacer frente a la decadencia española. El problema está en que quizá España no estaba preparada para un reformista de tan alta calidad, quizá no estaba aún madura para ello. Segar el trigo en verde podría ser una buena síntesis de lo que fue la Segunda República desde su nacimiento hasta su triste desaparición.

Franco, otro de los personajes clave de esta historia, tampoco era un recién llegado. Lo fuera o no, este sí que tenía bien clara su misión de hombre providencial, o al menos de centinela del orden tradicional en España. Y es que, ciertamente, podía sentirse satisfecho de sí mismo. Lo había logrado todo dentro de la carrera militar. Nunca hubo otra opción para él que las armas, otra cosa era inimaginable. Y ascendió como un rayo, llegando a convertirse en el general más joven de su época. Franco se labró una meteórica ascensión a base de heroicas gestas de armas forjadas en las arenas del norte de África, donde se ganó fama de despiadado y valiente. Fue uno de los militares más decididos a la hora de sostener la guerra contra la República del Rif hasta derrotarla, costara lo que costara, haciéndose así un puesto destacado entre los sectores más duros y belicosos del ejército; tanto que es famosa la anécdota que cuenta que organizó un banquete con motivo de la llegada a África del dictador Miguel Primo de Rivera, en el que todos los platos estaban compuestos por huevos, haciéndole ver que eso era precisamente lo que le faltaba. No hay duda de que a Primo de Rivera se le debió de indigestar el banquete, pero no se atrevió a firmar un expediente que sin duda habría merecido. El cadete “Franquito” de la academia militar, moreno, bajito y de voz

atiplada, se había convertido en un mito para las nuevas generaciones militares, que le admiraban como uno de los héroes de Marruecos. Ya era un símbolo. Y contra eso no podía hacer nada ni siquiera el dictador².

Tras el fin de la Guerra de África fue nombrado director de la Academia Militar General de Zaragoza. En octubre de 1934 estalló la insurrección obrera de Asturias y el gobierno radical-cedista se echó en brazos del “héroe de África” para que le resolviera la papeleta, que se saldó con la intervención de la legión y una saña contra los vencidos nunca vista en Europa. Se había convertido en el hombre de confianza del gobierno y fue nombrado jefe del Estado Mayor. Ya no podía subir más alto, o eso creía él. Sin embargo, la victoria del bloque de las izquierdas en las elecciones de 1936 desestabilizó su magnífica vida. El hecho de que sus enemigos declarados ascendieran al poder suponía con toda seguridad no poder seguir manteniendo su privilegiado puesto, cosa que efectivamente ocurrió, ya que poco después el gabinete Azaña lo destinó a Canarias por considerarlo desafecto. Otra razón más para odiar a Azaña y a la república de izquierdas que le relegaba.

Y mientras el presidente Azaña trabajaba en sus proyectos de reforma, el futuro “Caudillo” tramaba desde su destino canario un plan para eliminar de una vez por todas a aquella “chusma roja” que no hacía más que poner trabas a España y al desarrollo de su propia carrera militar. Y en eso de tramar, Franco era más fino que su imaginario oponente gubernamental. Si bien es cierto que intelectualmente Azaña estaba muy por encima de Franco, eso no quiere decir que este no tuviera cabeza. Si Azaña era el intelectual urbano y moderno, Franco contaba en grandes dosis con la inteligencia rural del cacique, del señorito de cortijo; una inteligencia sibilina ideal para organizar y enfrentar a las personas, de la que carecía

Azaña y que le sirvió para imponerse sobre los demás. Muy al contrario, el republicano ostentó el cargo de jefe de estado durante la guerra civil, pero en la práctica fue relegado por personalidades más apasionadas. La vida es una selva, y de eso sabía mucho más Franco que Azaña.

SEGAR EL TRIGO EN VERDE

El 19 de febrero de 1936 se formó un gobierno interino de urgencia casi íntegramente formado por miembros de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, que a sabiendas de su interinidad se dispuso a allanar el camino al próximo gobierno atacando sin demora las acciones más urgentes. Así, tan pronto como el 21 de febrero el gabinete Azaña promulgó un decreto de amnistía que afectó a un gran número de presos, injustamente encarcelados durante la etapa de gobierno de la derecha, principalmente a resultas de las huelgas de octubre de 1934³. Más de ochocientos presos políticos salieron de nuevo a la calle, libres de cargos, entre la satisfacción de la izquierda y el desagrado de la derecha. Esta amnistía había sido fervientemente solicitada por las masas populares y de hecho era uno de los puntos básicos del programa con el que el Frente Popular se presentó a las elecciones. De no haberlo completado, Azaña habría tenido muchísimos problemas con las izquierdas, que era en quienes al fin y al cabo se apoyaba. Para la derecha, en cambio, aquello fue una especie de salida masiva de prisión de revolucionarios confesos dispuestos a dinamitar los pilares del estado con la aquiescencia del gobierno, lo que la reafirmó en su idea de que Azaña estaba preparando la revolución y que no era menos “rojo” que los demás. Para mayor desazón de las derechas, pocos días después la Generalitat fue aclamada con un recibimiento apoteósico a su retorno a Barcelona. Tras su estancia en distintos penales del sur de España, los

miembros del gobierno catalán volvían a sus puestos de responsabilidad gubernamental como si nada hubiera pasado, con el *president* Companys a la cabeza. La reactivación y desarrollo del autonomismo catalán era otra de las promesas electorales que el gobierno de Azaña cumplía nada más sentarse en el sillón presidencial; y es que el republicanismo reformista tenía muy claro que en la cuestión de las identidades nacionales, España arrastraba un terrible problema secular que amenazaba con cronificarse si no se le prestaba la debida atención. La actitud general de los gobiernos de la monarquía había sido el de mirar para otro lado, obviando el asunto, o la pura y simple represión de sus órganos de expresión. Sin embargo, el hecho es que, ayer como hoy, existe un nada desdeñable número de ciudadanos que se identifican con colectividades nacionales distintas a la española. Los republicanos aseguraron desde el primer momento que este era uno de los frentes más importantes que había que resolver y se pusieron manos a la obra a fin de estructurar un estado regional o federal para satisfacer las aspiraciones de los distintos nacionalismos, incluido el español. La vía estatutaria fue a todas luces insuficiente para los sectores más fervientemente independentistas y demasiado audaz para los defensores de un nacionalismo español unitario, pero los republicanos consideraron que, dejando de lado ambos extremos, la solución estatutaria satisfaría a la mayoría de la población. Esta creencia venía dada por el hecho de que el catalanismo en todas sus vertientes tomó parte activa en el pacto de San Sebastián⁴, lo que hizo que las reivindicaciones catalanas fueran escuchadas nada más proclamarse la república.

El catalanismo no fue solamente el nacionalismo más activo y de mayor peso político y demográfico del estado, sino también uno de los más importantes sostenes de la república de izquierdas. A partir de 1931 la primacía del

nacionalismo moderado y burgués de la *Lliga Regionalista de Catalunya* -posteriormente renombrada como *Lliga Catalana*- dentro del campo del catalanismo político fue sustituida por un nuevo modelo, más progresista y decididamente republicano, representado por *Esquerra Republicana de Catalunya*. ERC dominó el campo político del catalanismo durante toda la etapa republicana, dando muestras de la vitalidad de una corriente nacionalista de izquierdas con bases populares sólidas que reclamaba el reconocimiento de la identidad catalana y una eventual independencia dentro del marco de avance social y reformismo de la izquierda azañista. Aunque de izquierdas y progresista, *Esquerra Republicana* acogió en su seno un número de sensibilidades políticas muy diversas, de manera que en el partido cabían desde reformistas moderados hasta independentistas radicales, incluido un sector asimilable a los fascismos europeos liderado por Josep Dencàs y sus uniformadas escuadras de *escamots*.

Además de en Cataluña, en otros territorios también se animó a la presentación de anteproyectos estatutarios, la mayoría de ellos acogidos con satisfacción por la república de izquierdas. En Galicia, una coalición llamada Partido Galleguista organizó comicios para aprobar un estatuto que elaboró sin que la república pusiera ninguna dificultad y que fue aprobado en junio de 1936 por más del 70% de los votantes, no aplicándose debido al inicio de la guerra civil. También Andalucía, con Blas Infante a la cabeza y un sentimiento reformista que conectaba bien con la república, inició un proceso autonómico que tampoco culminó por el estallido de la guerra civil. Únicamente el nacionalismo vasco, representado casi al cien por cien por un PNV católico en lo religioso y conservador en lo social, tardó más en ver reconocido su estatuto; de hecho, fue tras el inicio de la guerra. En contraste con el nacionalismo moderno y cosmopolita de la Esquerra y los partidos que lideraron el autonomismo en Galicia y Andalucía, el PNV

miraba con recelo a la “república atea” que desde Madrid amenazaba al edén vasco. El nacionalismo vasco había arraigado en poco tiempo y con mucha fuerza en la zona rural del país, pero el cinturón industrial del Gran Bilbao continuaba impermeable a su mensaje. Junto con Madrid y Asturias, la margen izquierda del Nervión continuaba siendo una de las bases más sólidas del PSOE y la UGT, certificando así el fracaso del PNV a la hora de generar un nacionalismo progresista que aglutinara a un espectro social más amplio de la sociedad vasca. Muy al contrario que en los casos gallego, andaluz o catalán, el nacionalismo progresista tuvo en el País Vasco una presencia meramente testimonial⁵. Así pues, las dos corrientes que se disputaban la hegemonía política y social en el País Vasco eran el nacionalismo confesional del PNV y el integrismo ortodoxo de los carlistas, anclados en una dinastía real varias veces derrotada. El territorio vasco se dibujaba así como una zona abonada para la contrarrevolución.

A pesar de todos los obstáculos, el gobierno interino de la república tenía muy claro que, en el poco tiempo que le quedaba hasta la constitución de las nuevas Cortes, debía de continuar con su labor de desbroce, para que el próximo gabinete pudiera acometer las reformas con ciertas garantías de éxito. La última de las decisiones que tomó consistió en alejar de los puestos cercanos al ejecutivo a los militares considerados peligrosos. Que los militares tramaban continuos planes contra el gobierno era algo sabido y en cierto modo asumido como algo natural. No en vano, los pronunciamientos militares de todo signo fueron una constante en aquella España convulsa de los siglos XIX y XX, de forma que en la mentalidad militar cuajó la idea de que uno de los principales deberes de la casta militar era velar por el orden en el país, siendo moralmente lícito levantarse contra el gobierno si consideraban que las cosas no iban bien. Consciente de todo ello, el gabinete Azaña

tomó la arriesgada decisión de destinar a Franco a la Comandancia General de Canarias, a Godea a Baleares y más tarde a otros, como el general Mola, a Pamplona. Al fin y al cabo este “destierro” no enemistaría más a los susodichos militares con la república y sí que libraría a esta de peligrosos elementos que desde sus puestos de influencia podrían haber conspirado contra ella. Sin embargo, el destino pamplonés de Mola, que pronto será conocido como “el director” en reconocimiento a su papel central en la trama del golpe contra la república, fue un error táctico imperdonable. De esta forma sancionaban legalmente el envío del que fue cerebro de la conspiración al destino más rabiosamente dispuesto a levantarse en armas contra la república. Y es que, a pesar del paso del tiempo, en la Navarra de 1936 el carlismo era, como en el siglo XIX, hegemónico e irreductible. Las milicias del partido, conocidas popularmente como “el requeté”, englobaban a una parte muy importante de la población masculina de la provincia, que no dudó en alzarse junto a Mola cuando este se sublevó contra la república en julio de 1936.

Sin embargo, los militares no eran los únicos que amenazaban el orden vigente. Debido en parte a la coincidencia cronológica con la etapa de expansión del fascismo y la extrema izquierda, en la España de los años treinta se había generalizado una cultura de la violencia que cooperó para que tanto los partidos de derechas como los de izquierdas se dotaran de grupos paramilitares prestos a actuar en caso de confrontación militar. El decano de estas milicias políticas era el ya mencionado “requeté”, columna vertebral de un auténtico partido en armas heredero de una tradición guerrera de la que los carlistas se sentían profundamente orgullosos. Con el tiempo, el PNV, el PCE, la CEDA y el propio PSOE formaron escuadras militares, por no hablar de la Falange, los *escamots* o los anarquistas, lo que propició un enrarecido clima que

desembocó en el enfrentamiento callejero: quema de iglesias, sabotajes contra sedes de diferentes partidos y asesinatos políticos al más puro estilo de Al Capone. El atentado político se convirtió en algo tan cotidiano como hacer de vientre y el gobierno se vio desbordado. Cada semana se proclamaba el comunismo libertario en algún punto de España y eran las fuerzas de orden público quienes tenían que “resolver” el problema haciendo uso de los métodos que todos imaginamos, con la consiguiente indignación de las izquierdas y el creciente enfado de las derechas. Los sectores más radicalizados de los diferentes partidos políticos se lanzaron con la fuerza del neófito a la práctica del terrorismo tal y como hoy lo conocemos. A un atentado de la derecha le respondía otro de la izquierda, en una espiral de violencia que no hacía sino empeorar siempre un poco más las cosas. Harto ya de semejante situación, el atentado falangista contra un profesor de universidad y diputado socialista dio la excusa perfecta al gobierno para ilegalizar a Falange Española de las JONS (15 de marzo de 1936). Días antes, jóvenes falangistas habían intentado asesinar a tiros a Luis Jiménez de Asúa cuando salía de su casa en dirección a su puesto de trabajo en la Universidad Central de Madrid. El profesor resultó ileso⁶, pero su escolta murió en el atentado. La ilegalización e ingreso en prisión de la cúpula de Falange supuso un claro aviso de que desde el gobierno no se iban a permitir semejantes actos de terrorismo, ni por parte de las derechas ni por las izquierdas. José Antonio Primo de Rivera, líder indiscutible del partido fascista español, fue encarcelado en el penal de Alicante.

Así las cosas, la primera semana de abril se constituyeron las nuevas Cortes, encargadas de escoger a un nuevo gobierno y a un nuevo jefe de estado, dado que, a petición del PSOE, Alcalá Zamora fue destituido por irregularidades en la disolución de las cortes anteriores. El 10 de mayo,

Azaña fue proclamado nuevo presidente de la república y Santiago Casares Quiroga, galleguista, republicano y “azañista”, encargado de la formación del gobierno.

LA CONSPIRACIÓN

El nuevo gabinete nació con la idea fija de marcar la legislatura con la impronta de la medida. Puso de nuevo en marcha las necesarias reformas del primer gobierno republicano, cercenadas durante el bienio radical-cedista, pero delimitando con mucho tiento cualquier tipo de reforma que molestara a los sectores más reaccionarios. Por ejemplo, al tiempo que desarrolló la organización de un sistema educativo laico, en ningún momento se pretendió terminar con el religioso, desarrollando una educación paralela y apoyando también la enseñanza católica desde las altas instancias. Los republicanos habían aprendido mucho de sus fracasos anteriores. Sabían que las proclamas y actitudes excesivamente progresistas serían rechazadas sin titubeos por la derecha, de modo que optaron por el cambio progresivo. Al fin y al cabo, un cocido se hace mejor a fuego lento. Sin embargo, las viejas rencillas pudieron más que las buenas intenciones. El odio inveterado de las derechas más extremistas no tenía cambio de sentido posible, hicieran lo que hicieran desde el poder. La situación en las calles siguió siendo caótica, y el caldeado ambiente político-social radicalizó hasta el extremo a los miembros más proclives a ello: las juventudes de los partidos. El caso más sintomático fue el de la CEDA, que tuvo que presenciar impotente cómo en los últimos meses anteriores a la Guerra Civil, el grueso de sus juventudes, las Juventudes de Acción Popular (JAP), se pasaron en masa a las filas de la ilegal Falange Española de las JONS, cuya devoción a la violencia lo convertía en un partido muy atractivo. Se ha dicho que a partir de estos

momentos FE-JONS se convierte *de facto* en FETJONS⁷ debido a que el ingreso masivo de elementos derechistas radicalizados, enamorados de los métodos expeditivos que los fascistas empleaban en su lucha cuerpo a cuerpo contra las izquierdas, desvirtuó su esencia original. Y es que cada vez menos gente creía en la república. En los meses previos a la guerra, la derecha republicana -o al menos no monárquica- de la CEDA, fue arrinconada por una derecha más vehementemente antiizquierdista representada principalmente en el Bloque Nacional y su adalid José Calvo Sotelo, un ex ministro de la dictadura que incendiaba los escaños del congreso cada vez que soltaba alguna de sus soflamas. Asimismo, dentro de las izquierdas se vivió un proceso paralelo; las diferencias dentro del PSOE entre el sector duro representado por Francisco Largo Caballero -agasajado por los soviéticos como el Lenin español-, y el moderado representado por Indalecio Prieto, llegaron hasta tal punto que se llegó a pensar en una más que probable escisión entre ambos sectores. El momento álgido llegó tras la victoria de los prietistas, favorables a un entendimiento con el gobierno y conscientes de que si el PSOE no lo apoyaba, la república se hundiría definitivamente. Los caballeristas no entendían cómo desde un partido marxista, como aún era el PSOE, se podía apoyar a un gobierno que representaba a la burguesía republicana sin que se les cayera la cara de vergüenza. No tomarían parte en ello. Había que hacer la revolución. Sin paliativos. Sin contemplaciones. Tal era la distancia que llegó a existir entre las dos secciones del partido que cuando se reunieron las cortes para escoger el gobierno que finalmente formó Casares Quiroga, la primera opción que se barajó fue la de Indalecio Prieto, y no prosperó porque fueron los caballeristas quienes vetaron su candidatura. Este no es el único ejemplo de la situación que se vivía dentro del PSOE, ya que en algún mitin del

partido Indalecio Prieto llegó a ser recibido a tiros entre gritos de “fascista” y otras exquisiteces parecidas.

Y mientras el sectarismo caballerista veía fascistas hasta en sus compañeros de partido, la derecha acusaba al gobierno de practicar una política destinada a implantar la dictadura del proletariado. Semejante prueba de estupidez política llevó a determinadas personas a plantearse la idea de implantar una dictadura republicana, para que se pudieran llevar a cabo las reformas necesarias sin que desde fuera estuvieran constantemente dinamitando la costosa labor del gobierno. La idea no pasó de eso, de idea. Ni siquiera llegó a calar en la gran mayoría de los republicanos. De hecho, la aplicación de semejante plan era frontalmente contraria a las ideas de Azaña y los suyos; pero visto desde una perspectiva sardónica, a uno se le ocurre que quizá eso podría haber salvado a la república y al país en su conjunto. Al fin y al cabo, el radicalismo político de las derechas y las izquierdas condujo a España a una guerra civil cruel y estéril. Quizá la extensión social del radicalismo no fuera más que el signo del bajísimo nivel cultural de los españoles de la época, tanto en los sectores obreros como en los aristocráticos. No sin cierto cinismo pero con mucha razón, Azaña afirmó con pena que “en España la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro (y que) si los españoles habláramos solo y exclusivamente de lo que sabemos, se produciría un gran silencio que nos permitiría pensar”. Frases ácidas, amargas, ingeniosas y cáusticas que dibujan con trazos gruesos pero acertados la realidad cultural de la España de los años treinta.

Frente a los desmanes, un poder fáctico a tener muy en cuenta en la España de la época: el ejército. Como sabemos, desde el mismo día de la victoria del Frente Popular, los militares, entre maniobra y maniobra, hacían planes de pronunciamiento. En un principio hubo diferentes proyectos en distintos acuartelamientos

protagonizados por heterogéneos elementos militares, pero fue el general Emilio Mola quien tuvo la virtud de engarzar a todas ellas en un único proyecto levantisco que, al menos, garantizaba un pronunciamiento menos chapucero. Nacido en Cuba y profundamente imbuido de un sentido de la responsabilidad de la que hacía gala en todas las facetas de su vida, Mola no era un militar al uso. Contaba con una amplitud de miras verdaderamente poco habitual en la casta militar; decididamente, no era monárquico y nunca pretendió organizar un golpe de estado para reinstaurar un sistema que consideraba vetusto. Mola rescató la idea de imponer una dictadura republicana, pero adulterada por un dominio completo del ejército como gobernante, juez, legislador y garante de la estabilidad nacional. Eso sí, sin ninguna idea política prediseñada. Coaligado con José Sanjurjo, un conocido militar exiliado en Portugal después de haber protagonizado un fallido golpe de estado en 1932, y en contacto estrecho con él, diseñó un alzamiento exclusivamente militar que tuvo su pistoletazo de salida en marzo de 1936, cuando se reunió con un grupo de generales entre los que se hallaba Francisco Franco. El proyecto se planteó con la idea clara de echar a la izquierda del poder, sustituyendo a los políticos por los militares con la idea expresa de arrinconar las ideas políticas preconcebidas y eliminar el desorden. En este plan Sanjurjo había de ser el líder indiscutible y jefe de la junta militar que haría las veces de gobierno. Mola tendría un papel destacado como lugarteniente del jefe, mientras que a Franco se le reservaba un destino como responsable de la Comandancia General de Marruecos. El avispado gallego no parecía del todo convencido, y a pesar de que la mayoría de los reunidos apoyaron la idea sin fisuras, no dio el sí esperado. Mola recalcó que el golpe no estaba diseñado contra la república sino contra la izquierda, y que había que desarrollarlo a la perfección, porque tal y como estaba el panorama político, si no se lograba un triunfo a

las primeras horas, las izquierdas no se iban a quedar de brazos cruzados. Era necesario que todos estuvieran perfectamente coordinados.

Durante los meses siguientes Mola diseñó un plan de acción en el que no dejaba ningún cabo suelto: las fechas, las maneras, lo que haría cada uno... Se comunicaba con el resto de los conspiradores por medio de la Unión Militar Española (UME), una organización derechista comprometida con el golpe, y firmaba como El Director. El levantamiento militar se gestó con Pamplona como punto neurálgico, una ciudad en la que el general se movía como pez en el agua y donde encontró numerosos colaboradores que le facilitaron su labor. Ninguna ciudad mejor que aquella para preparar lo que tenía entre manos.

A fuerza de recalcarlo, todos los conspiradores tenían muy claro que se trataba de un levantamiento exclusivamente militar, pero tanto Mola como Sanjurjo se daban perfecta cuenta de que era necesario un apoyo civil. Sin su colaboración, el movimiento militar difícilmente tendría una base firme y terminaría fracasando. Mola no se hacía ilusiones en cuanto al seguimiento que tendrían. Si la derecha civil los apoyaba era seguro que Navarra, Álava y Castilla la Vieja se unirían inmediatamente a ellos, pero daba por seguro que, habida cuenta del peso específico de la izquierda en los grandes núcleos industriales, ni Madrid, ni Barcelona ni Valencia, ni Asturias se sumarían a ella. Tampoco la Andalucía rural, dominada por el anarquismo. En caso de producirse una situación de guerra civil virtual, su mente analítica no concebía otra salida más que la aplicación de una represión feroz en aquellas zonas y regiones que no se unieran al levantamiento militar. La represión que se llevó a cabo en la zona nacional durante la guerra no fue tan solo fruto de la saña -que también- sino de un plan minuciosamente diseñado y razonado. Una vez pronunciados, los militares rebeldes ya no tendrían marcha atrás. Ganar al precio más alto. Exterminar al enemigo.

Mola lo dejó bien claro cuando dijo que “todo el que no esté con nosotros estará contra nosotros”.

Precisamente para eso era necesario el apoyo de elementos civiles que diesen cobertura a la represión. Mola había pensado que este papel lo debían de jugar los partidos de derechas, pero siendo siempre el ejército quien los instrumentalizase y no al revés. La conspiración recibió sumas de dinero de acaudalados derechistas e incluso partidos como la CEDA o Renovación Española aportaron su colaboración monetaria. Desde su núcleo pamplonés, Mola dirigía los hilos de una conjura que crecía mes a mes a pesar de que todo el mundo, desde la derecha a la izquierda, sabía que se estaba preparando. El gobierno tomó tímidas medidas y los principales sospechosos de estar implicados fueron sometidos a vigilancia policial. Mola fue sometido a una inspección que capeó con éxito gracias a un chivatazo.

Del mundo civil, Mola no solamente buscaba apoyo económico. El general puso especial mimo en captar a dos partidos que se enorgullecían de contar con grupos paramilitares organizados: el carlismo y los falangistas. Ambos partidos, tan diferentes uno de otro, en un principio mostraron serias reservas al proyecto de los militares, ya que exigían unas contrapartidas político-ideológicas que Mola no estaba dispuesto a conceder. La Falange del encarcelado Primo de Rivera temía que un excesivo protagonismo militar pusiera en peligro determinadas reformas de la izquierda, como la agraria; pero, sobre todo, una revolución nacionalista que creían fundamental y que tan solo ellos pretendían saber aplicar. Primo de Rivera se mostraba dispuesto a secundar la sublevación a cambio de un puesto determinante de su Falange en el engranaje del futuro estado español. Igualmente, los carlistas discutieron en numerosas ocasiones con el director exigiendo prerrogativas inaceptables a cambio de poner el “requeté” a su disposición. Ya habían planeado una insurrección por

su cuenta, una nueva “carlistada” que Mola, su perorando el desprecio que sentía por aquel monarquismo desfasado, les hizo ver que estaba destinada a un nuevo fracaso. Convenció a los carlistas de que su sublevación solamente tendría éxito dentro de los márgenes del golpe militar que estaba preparando, sin embargo reclamaciones como la instauración de la dinastía carlista en el trono español le parecieron absurdas e inaceptables. Los carlistas le pedían cosas que no estaba dispuesto a conceder, pero era necesario tenerlos a su favor, ya que eso significaba la suma de un importante contingente paramilitar y el apoyo de Navarra y gran parte del País Vasco. Tan duras llegaron a ser las exigencias del carlismo y tal la obcecación de Mola en no transigir que, días antes de la fecha fijada para el levantamiento, se rompieron las conversaciones. Lo que parecía un tremendo traspies devino en solución ya que, enfadado con la cúpula carlista, Mola inició una serie de reuniones con la junta carlista regional de Navarra y estos le dijeron que sí. El carlismo de base cerró filas en torno al proyecto de Mola originando en el seno del partido una fisura entre las bases y la ejecutiva que obligó a esta a recular y unirse a la conspiración militar sin pedir nada a cambio, con el argumento de que ya solventarían sus diferencias con Mola después del pronunciamiento. Igualmente, las bases “japistas” de Falange se unieron al plan con fervor, sin contrapartidas de ningún tipo.

Además de los señalados, Mola también pulsó la opinión del Partido Nacionalista Vasco. Consideraba trascendental –y factible– que el País Vasco se levantara en armas junto a los militares. Con las ciudades industriales más importantes (Madrid, Barcelona, Valencia) irremisiblemente partidarias de la república, a Mola tan solo le quedaba el País Vasco y su tejido fabril para intentar equilibrar la balanza industrial en caso de guerra. Por ello concertó una serie de reuniones con los dirigentes del PNV. Mola confiaba en que un partido católico y conservador